



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN SALA CIVIL

Medellín, veinte (20) de octubre de dos mil veintiuno (2021)

Ref.: Exp.: 05001 31 03 011 2018 00013 01

Magistrado Ponente: JOSE OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS

Asunto: Resuelve solicitud aclaración o corrección.
Proceso: Acción Popular.
Demandante: BERNARDO ABEL HOYOS MARTINEZ, coadyuvado por DIEGO ALEJANDRO URIBE ESCOBAR.
Demandado: BANCO CAJA SOCIAL S.A..
Extracto: La sentencia no es revocable o reformable por el juez que la profirió. La aclaración procede cuando existan motivos serios de duda, mientras que la corrección lo es cuando en la providencia se haya incurrido en error puramente aritmético puede ora por errores por omisión, cambio o alteración de palabras, eventos que no se patentizan en las presentes. No obstante, al evidenciarse que se han vulnerado los derechos de contradicción, tutela jurisdiccional efectiva, y debido proceso, resulta del caso salvaguardar los mismos mediante la correspondiente medida de saneamiento.

ASUNTO A TRATAR

Se decide la solicitud de aclaración, corrección y saneamiento, que formula la parte accionada, respecto a la sentencia proferida por esta Corporación el veinticuatro (24) de septiembre pasado (2021), previos;

ANTECEDENTES

Expone el accionado que en la sentencia mencionada, en el acápite de antecedentes al referirse a los alegatos en segunda instancia, se indicó que la parte demandada “*guardó silencio*”, lo cual no es cierto, pues

ellos los presentaron en término (9 de septiembre), enviándolos a la dirección electrónica de la Sala, la cual se anunció en el auto que admitió el recurso y corrió traslado para alegar, esto es secivmed@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Que del auto que dio traslado para alegar, el término vencía el 10 de septiembre de 2021, insistiendo que el escrito lo presentó el día 9, habiéndose esbozado las razones por las cuales el fallo de primera instancia debió ser confirmada, máxime cuando no se podían admitir documentos aportados fuera de las oportunidades probatorias.

Por lo anterior solicitó confirmar la sentencia de primera instancia. En tales términos, ha de resolverse lo deprecado, previas;

CONSIDERACIONES

Ciertamente las sentencias pueden ser aclaradas, corregidas y adicionadas en la forma establecida en el ordenamiento procesal civil, sin que ello constituya un instrumento para replantear el litigio, o en su defecto, para generar una nueva ocasión de análisis y explicación de conceptos ya definidos, pues como de tiempo atrás ha indicado el supuesto normativo pertinente; *“La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció”*¹.

En esos términos, en cuanto a la petición del demandado de confirmar la sentencia de primera instancia, resulta improcedente, ya que no se

¹ Sobre el punto el artículo 285 del C. G. del P., reza: *“La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Sin embargo, podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutive de la sentencia o influyan en ella...”*.

adecúa a ninguno de los supuestos previstos en el Capítulo III, del Título I de la Sección IV del Libro II del C. G. del G.².

Respecto a la aclaración de la decisión, esta procede “... *cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutive de la sentencia o influyan en ella.*” (artículo 285 C. G. del P.), lo que aquí no se plantea de manera alguna.

En cuanto a la corrección deprecada, desde lo normativo ella procede cuando se está frente a un “*error puramente aritmético*”, o también ante “*omisión o cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén contenidas en la parte resolutive o influyan en ella.*”, donde de lo presentado, ni lo uno ni lo otro, en la medida, que lo que se señala es la omisión pero en cuanto a unos alegatos que no se consideraron, por lo que pasaremos a referirnos a lo mismo.

De otro lado, dice el accionado que al no haberse tenido en cuenta sus alegatos conclusivos, en los términos del artículo 132 del C. G. del P. solicita “*se ejerza una medida de saneamiento*”, para lo que explicó cómo fue que envió sus alegatos conclusivos³, y así se corrobora con

² Sobre ello, la doctrina ha indicado: “*Las sentencias judiciales una vez proferidas por el juez agotan la competencia funcional, razón ésta por la cual no pueden ser objeto de nuevo pronunciamiento por el mismo juzgador que las profirió, salvo el caso de que sea procedente la corrección de errores aritméticos o de algunas expresiones, o en la hipótesis de ser necesaria su adición o aclaración. Será procedente la adición del fallo cuando quiera que quien lo profirió no hubiere decidido sobre todos los extremos de la litis, o lo que es lo mismo, hubiere incurrido en una omisión por abstenerse de decidir sobre alguno de los aspectos que deberían haberse incluido en la decisión.*” (Corte Constitucional, auto A093 de 2006).

³ Para el efecto el peticionario explicó: “*En efecto, lo señalado en la sentencia es contrario a la realidad, puesto que como se acredita con los documentos adjuntos al presente escrito, el día 9 de septiembre de 2021 fue radicado por el suscrito el escrito contentivo de los alegatos en conclusión en segunda instancia. Precisamente, se vislumbra en el mismo que el correo electrónico de radicación fue dirigido a la dirección electrónica de la Sala anunciada en el auto que admitió el recurso correspondiente y corrió traslado para alegar (secivmed@cendoj.ramajudicial.gov.co) y, además, se incluyó en copia al demandante y al Procurador delegado... Ahora bien, no sobra precisar que dicho escrito fue radicado dentro de la oportunidad dispuesta para el efecto, ya que conformidad con lo indicado en*

la constancia secretarial que antecede; en esos términos, depreca; “... *que confirme la sentencia del 26 de julio de 2021 proferida por el Juzgado 11 Civil del Circuito y condene en costas a la parte actora.*”.

Ciertamente en la sentencia de marras, en el acápite de antecedentes denominado “*DE LOS ALEGATOS EN SEGUNDA INSTANCIA*”, entre otras se indicó “*La parte demandada guardó silencio*”, por lo que el fallo procedió de conformidad; sin embargo, de la constancia secretarial que antecede se advierte respecto a la parte accionada que: “*El correo electrónico contentivo del escrito de alegatos al que se hace alusión, fue remitido al buzón electrónico secivmed@ramajudicial.gov.co*” (subrayado en el texto), de lo que se tiene a que el interesado alegó en tiempo, habiendo enviado el correspondiente escrito a un correo erróneo.

Tal error en el envío de los alegatos, en este caso es responsabilidad de la judicatura, pues en efecto ese fue el correo que se señaló en el auto admisorio de la alzada, lo que implica que el no haber atendido los alegatos presentados, constituye un error judicial que en últimas vulnera los derechos de contradicción, tutela jurisdiccional efectiva, y el mismo debido proceso, lo que debe ser enmendado por el mecanismo legalmente previsto, como es efectuando el control de legalidad del caso mediante la declaratoria de la correspondiente nulidad, sobre todo, cuando la sentencia cuestionada no está ejecutoriada.

el artículo 37 de la Ley 472 de 1998 y en el artículo 14 del Decreto 806 de 2020, mediante auto notificado por estado del 27 de agosto de 2021, se concedió a la parte recurrente el término de 5 días contabilizados a partir de la notificación del auto para que presentara los alegatos de conclusión de segunda instancia, los cuales fenecieron el pasado 3 de septiembre de 2021, razón por la cual, el término con el cual contaba la parte demandada para alegar de conclusión, vencía el día 10 de septiembre de 2021, y como ha sido manifestado anteriormente, el escrito correspondiente fue radicado el día 9 de septiembre de 2021.”.

La medida de saneamiento advertida se deriva de la contemplada en el numeral 6º del artículo 133 del C. G. del P., en cuanto a que no se consideró un alegato de conclusión oportunamente presentado, lo que equivale a desconocer la oportunidad para alegar de conclusión, en este caso, precisamente, la opción de descorrer el traslado, con lo que se vulneran los derechos fundamentales atrás mencionados, sin que ello sea legal ni mucho menos legítimo en una acción constitucional como la que nos ocupa, pues como ha dicho la Jurisprudencia:

“... Nada de lo anterior significa, sin embargo, que el carácter público de la acción popular, el interés general que la inspira, su flexibilidad procesal y las amplias facultades protectoras con las que cuenta el juez –incluida aquella de fallar ultra y extrapetita– deban hacernos olvidar que, como sucede en toda actuación judicial, la observancia y el respeto del derecho al debido proceso, y sus vertientes de defensa y contradicción, son insoslayables. El mismo artículo 5º de la Ley 472 de 1998 prevé, en ese sentido, que el juez popular debe “velar por el respeto al debido proceso, las garantías procesales y el equilibrio entre las partes”. Subrayado intencional. Corte Constitucional, Sentencia T-004/19.

Por lo expuesto, la Sala Primera de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín;

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de aclaración y corrección deprecadas por la parte actora.

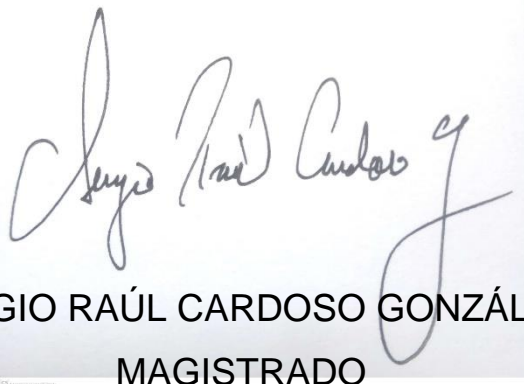
SEGUNDO: ANULAR la sentencia proferida por esta Sala de Decisión el día veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), según lo motivado.

TERCERO: En firme lo aquí decidido, vuelva el expediente al Despacho del magistrado sustanciador para proveer como en derecho corresponda. Sin costas.

NOTIFÍQUESE.



JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS
MAGISTRADO



SERGIO RAÚL CARDOSO GONZÁLEZ
MAGISTRADO



MARTÍN AGUDELO RAMÍREZ
MAGISTRADO